

No. 1

Perspectivas

Revista de Ciencias Sociales



Enero | Junio 2016

**ESTADOS UNIDOS Y LOS
DERECHOS HUMANOS EN
LA ARGENTINA DURANTE
LA ÚLTIMA DICTADURA**

POR LEANDRO MORGENFELD

RESUMEN

La reciente visita de Obama, que coincidió con el 40 aniversario del inicio de la última dictadura, reactualizó el debate sobre el rol de Estados Unidos en el golpe de estado y el vínculo que estableció luego con el gobierno militar. Si bien no hubo intervención directa, como había ocurrido Chile casi tres años antes, sí existió un apoyo político, económico y militar a la dictadura, que fue cambiando a lo largo de los años, cuando la problemática de los derechos humanos pasó a ser un eje relevante de la política de la Administración Carter y un punto de conflicto, tanto al interior de Estados Unidos, como en su relación con la Argentina. En 1976, las fuerzas armadas daban garantías al Secretario de Estado Henry Kissinger de mantener al país en el rumbo occidental, cristiano y anticomunista que requería la *seguridad nacional* de Estados Unidos. En los meses siguientes, sin embargo, la política exterior estadounidense comenzaría a mutar. En el presente artículo analizamos cuál fue el rol de los derechos humanos en el sinuoso vínculo entre la Casa Blanca y la Rosada y cómo ese tema generó debates y tensiones al interior de cada uno de los gobiernos. Este análisis busca aportar al conocimiento de un capítulo trágico de la historia argentina, pero también entender las lecturas que, en tiempos actuales, se realizan sobre el rol de Estados Unidos hacia las dictaduras de la región en los años setenta, en función de necesidades e intereses del presente.

Palabras clave: Argentina – Estados Unidos – Guerra Fría – Doctrina de Seguridad Nacional – DDHH.

ESTADOS UNIDOS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA¹

LEANDRO MORGENFELD*

Introducción: la visita de Obama y el debate sobre Estados Unidos y la última dictadura

Cuando en febrero de este año se conoció la noticia de que la visita de Barack Obama coincidiría con el 40 aniversario del último golpe de estado, se desató la polémica, a partir del rechazo de los referentes de los principales organismos de derechos humanos, incluyendo a las Madres, Abuelas, Hijos, Familiares y el SERPAJ. Si bien pudo obedecer a una casualidad no deseada, teniendo en cuenta que el viaje fue organizado a último momento, y en el marco de la histórica visita a Cuba, las declaraciones de la Casa Blanca, a través de Ben Rhodes, asesor de Obama en temas de seguridad nacional, llevaron a muchos a considerarlo una provocación: “Con respecto a Argentina, vamos a tener una asociación más estrecha en diferentes temas. De hecho, el presidente Macri ha sido un fuerte activista por la democracia y los derechos humanos en América Latina”². El nuevo presidente argentino, al igual que el Departamento de Estado,

¹ El siguiente artículo es resultado de una investigación en el marco del Proyecto UBACyT 2013-2015: “Argentina y las relaciones internacionales en dos décadas turbulentas. Los sectores internos, las relaciones interamericanas y el vínculo con los Estados Unidos (1963-1983)”.

* Docente UBA, ISEN y USAL. Investigador Adjunto del CONICET, radicado en el IDEHESI (UBA-CONICET). Autor de *Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas* (Ediciones Continente, 2011), *Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos* (Capital Intelectual, 2012), *El ALCA: a quién le interesa?* (Ediciones Cooperativas, 2006) y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com. Correo: leandromorgenfeld@hotmail.com

² Citado en Morgengeld (2016a).

entiende que los derechos humanos pueden servir como un instrumento o una justificación para intervenir contra los gobiernos no alineados, como lo demostró cuando condenó a Venezuela en la Cumbre del Mercosur de diciembre pasado.

Tal fue el revuelo, y el temor a las movilizaciones contra el presidente estadounidense, que en las semanas siguientes al anuncio de la visita, Mauricio Macri sobreactuó un compromiso con los derechos humanos que jamás tuvo. Visitó la ex ESMA, recibió a Estela de Carlotto y a representantes de los organismos por primera vez y hasta mencionó el tema en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el 1 de marzo: “Este año se cumplen 40 años del golpe militar, cuando se consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos nunca más a la violencia”³. Mientras Macri pretendió utilizar la visita de Obama para aparentar un compromiso con los derechos humanos que nunca tuvo, el gobierno de Obama se vio obligado a modificar los planes iniciales. En primer lugar, cambió la agenda, para concentrar las actividades en Buenos Aires el día 23, y partir hacia Bariloche el 24 a la mañana, para estar bien lejos de las movilizaciones a Plaza de Mayo, que terminaron siendo una de las más convocantes de toda la historia. Pocas horas después de hacerse pública una carta del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y un editorial del influyente *New York Times*⁴, anunció la desclasificación de documentos militares y de inteligencia sobre la dictadura, algo que los organismos de derechos humanos vienen reclamando hace años. Mas allá de estas iniciativas, Obama no pudo evitar las preguntas sobre el tema y, al participar con Macri de un acto en el Parque de la Memoria, el 24 de marzo a la mañana, se reactivó el debate sobre las relaciones de Estados Unidos con la última dictadura militar (Morgenfeld, 2016b).

A cuatro décadas del golpe, es necesario analizar la responsabilidad de Estados Unidos en el aliento a las dictaduras en toda la región, en las décadas de 1960 y 1970, las contradicciones que se expresaron al interior del gobierno del país del Norte y cómo afectaron especialmente a la Argentina, en torno al tema de los derechos humanos.

Del apoyo al golpe de 1976 hacia los roces por los Derechos Humanos

El derrocamiento de Isabel Perón, el 24 de marzo, produjo un giro en la relación con Estados Unidos. No hubo intervención directa de la CIA, como en el caso chileno, pero sí un apoyo político, económico y militar a la dictadura. El anuncio del plan de Martínez de Hoz, llevó a la Administración Ford a otorgar ayuda financiera a la Junta Militar encabezada por Videla. En los meses siguientes, fluyó también la asistencia militar. El ministro de economía, según la Casa Blanca, era una garantía para los intereses económicos estadounidenses en la región. Y el gobierno de facto, una garantía para el combate contra la subversión. Las fuerzas armadas, después del auge de luchas populares inaugurado por el Cordobazo y del traumático retorno del peronismo, daban seguridades a Kissinger de mantener al país en el rumbo occidental, cristiano y anticomunista. La Junta Militar parecía ser un resguardo para la *seguridad nacional* de Estados Unidos. Esto era música para los oídos de la administración republicana, a pesar de las voces en el Capitolio y en el propio Departamento de Estado que tempranamente cuestionaron la represión sistemática de los derechos humanos en Argentina. El gobierno encabezado por Videla, por su parte, quería evitar esas críticas y era consciente de que, siendo un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, se tornaba difícil para la Casa Blanca apoyar públicamente y sin matices a una junta militar responsable de una cruenta represión interna (Morgenfeld, 2014).

³ Página/12, 2 de marzo de 2016.

⁴ *New York Times*, 17 de marzo de 2016.

Dos días después del golpe se reunieron Kissinger y William D. Rogers, Subsecretario de Estado, y debatieron sobre Argentina y la postura que debía tomar la Casa Blanca frente al golpe. Mientras Rogers anticipaba que se derramaría mucha sangre y aconsejaba *no apresurarse*, Kissinger planteó que los golpistas requerían del estímulo estadounidense y no quería dar la idea de que serían hostigados por Washington⁵. Estas dos posiciones resumían el debate dentro del Departamento de Estado, los favorables al rápido reconocimiento del gobierno militar y quienes querían evitar repetir el error cometido con Chile y Uruguay.

Ya en junio, la CIA tenía conocimiento de la existencia del Plan Cóndor, la coordinación represiva con las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay para el asesinato secreto de perseguidos políticos. Sin embargo, ambas tendencias en el Departamento de Estado caracterizaban a Videla como la línea moderada dentro de la Junta Militar que gobernaba Argentina y eran renuentes a atacarlo directamente, supuestamente para no fortalecer su desplazamiento por parte de la *línea dura*.

Desde nuestra perspectiva, más que concluir que, a diferencia de los casos de Chile o Uruguay, en el caso argentino primó la política de *hands off* -de prescindencia o de distancia-, en realidad ocurrió algo similar que una década atrás. Como mostramos más arriba, en 1966, a pesar de las simpatías para con Onganía, el reconocimiento diplomático de su gobierno se demoró unos días, a diferencia de lo que había ocurrido dos años antes con el golpe contra Goulart en Brasil. Como señalamos, eso respondía a la necesidad de guardar las formas. Lo mismo puede decirse respecto al golpe de 1976. Más que una política de *no intromisión*, lo que hubo fue un doble discurso por parte de Kissinger, planteando el público la preocupación por la violación de los derechos humanos, y en privado avalando el terrorismo de estado, ya conocido por el Departamento de Estado semanas después del golpe. En dos entrevistas entre Kissinger y el canciller César Augusto Guzzetti, en junio y septiembre de 1976, el primero respaldó el terrorismo de Estado y hasta sugirió que *hicieran lo que tuvieran que hacer lo más rápidamente posible*⁶. Y esto perduró, más allá de las voces disidentes en el propio gobierno estadounidense y en la opinión pública de ese país.

La situación comenzó a cambiar en enero del año siguiente, cuando los demócratas volvieron a la Casa Blanca. Durante la presidencia del demócrata James Carter (1977-81), uno de los ejes de su política exterior fue denunciar el no respeto de los derechos humanos en determinados países: “Desde 1977 el gobierno de Carter desplegó la política de promoción de los derechos humanos, en el marco de una estrategia global para recomponer la hegemonía norteamericana en el mundo, elemento que caracterizó la política de Washington hacia la dictadura argentina. La condena a las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Videla se combinó, en 1978, con la suspensión de toda ayuda militar a Argentina. La dictadura respondía a EE.UU. con acusaciones de 'intervención en los asuntos internos' y reproches sobre la incomprensión de Occidente respecto de su cruzada 'antisubversiva'...” (Rapoport y Spiguel, 2005: 57). Claro que había al menos para Washington una doble vara. Mientras se sancionaba la violación de los mismos en Argentina, no se hacía lo propio con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, ni había una condena al Plan Cóndor, impulsado por la propia CIA.

Como consecuencia de este rasgo de la política exterior de su Administración, la relación con los militares argentinos atravesó distintas fricciones. El sustento material de los roces bilaterales debe

⁵ Secretary's Staff Meeting, 26 de marzo de 1976, pp. 19 a 23. La transcripción y traducción de ese diálogo está reproducida en Novaro (2011: 59-60).

⁶ Novaro reproduce parte de la transcripción del segundo encuentro entre Kissinger y Guzzetti, del cual el último volvió “eufórico” (Novaro, 2011: 70-73). Véanse también Sheinin (2006: 163-164), Mazzei (2013) y Rabe (2012: 143).

comprenderse a la luz del nuevo triángulo económico con Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer país era el abastecedor principal de las importaciones argentinas y sostenía financieramente el espiral de endeudamiento requerido por la política de dólar barato y la *tablita* de Martínez de Hoz. La Unión Soviética y los países de Europa del Este, por su parte, fueron el destino privilegiado de los cereales y las carnes argentinas. Este sorprendente vínculo con Moscú y sus satélites, que se remontaba a la etapa de Lanusse, no hizo sino profundizarse desde 1979, cuando tras la invasión soviética a Afganistán, Estados Unidos lanzó un embargo comercial contra su rival, que el gobierno argentino decidió no acompañar. La *guerra fría* registraba una nueva escalada, y el tándem Videla-Viola la aprovechaba para favorecer a la reprimarización de la economía alentada por los grandes productores agropecuarios.

La negativa argentina a participar en el embargo contra la Unión Soviética, sumada a las acusaciones por violación de los derechos humanos y a la negativa a apoyar la política de Washington de no proliferación nuclear en América Latina tensaron las relaciones con la Casa Blanca. Carter ejerció presión sobre Videla de distintas formas: no vendiendo armamentos, limitando la provisión de bienes estratégicos e impulsando una misión de la OEA que llegó al país a recoger acusaciones sobre el terrorismo de Estado. Hubo una negociación entre el gobierno argentino y el Departamento de Estado para aceptar la llegada de esta misión a cambio de que no realizara un informe demasiado duro contra la Junta Militar encabezada por Videla (Novaro, 2011: 117-155). Sin embargo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó muy mal parado al gobierno e incrementó las presiones externas e internas. De todas formas, la gran banca privada, liderada por David Rockefeller, siguió financiando a la Junta, y lo propio ocurrió con el Tesoro estadounidense. De esta forma, continuaron fluyendo los créditos hacia Argentina. Los contactos de Martínez de Hoz con el gran capital estadounidense, entonces, limitaron las sanciones esbozadas por Carter. Además, en 1979 triunfó en Nicaragua la Revolución Sandinista, con lo cual Washington incrementó la política dura de combate contra el comunismo en América. En consecuencia, se fortalecieron las críticas estadounidenses al énfasis de Carter en el tema de las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras aliadas. La *guerra fría* obligaba a *hacer la vista gorda*.

Sobre la política de derechos humanos y el vínculo Argentina-EEUU durante la dictadura, es recomendable leer el reciente libro de William Michael Schmidli⁷. El quinto capítulo está dedicado específicamente a la problemática de los derechos humanos en la relación Estados Unidos-Argentina en el período transicional de 1978 a 1979. Desarrolla la amplia tarea de Franklin A. "Tex" Harris, funcionario en la embajada en Buenos Aires, quien se transformaría en un gran aliado de Derian para presionar en Estados Unidos en pos del recorte de la ayuda económica y la asistencia militar a la Junta Argentina⁸. Esta ofensiva, sin embargo, se topó con una enorme oposición por parte de la burocracia en Washington, la cúpula empresarial, funcionarios de alta jerarquía de la Administración Carter, el Departamento de Defensa y los medios de comunicación conservadores. Schmidli describe la gran batalla que se dio en torno al voto estadounidense negativo para otorgar créditos a la Argentina en las instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que forzaron a Videla, por ejemplo, a aceptar la visita de la Comisión

⁷ Véase la reseña crítica que realizamos sobre esa investigación (Morgenfeld, 2015).

⁸ Entrevistamos personalmente a Tex Harris el 26 de marzo de 2016, en el marco de su visita a Buenos Aires para participar del acto que encabezó Obama en el Parque de la Memoria. Allí nos contó los enfrentamientos que tuvo con el propio embajador de Estados Unidos en la Argentina, quien era su superior, y cómo pudo sortear sus resistencias para reportar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el terrorismo de estado.

Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 1979. Este incremento de la presión sobre la Junta –que se produjo también en un encuentro personal entre Carter y Videla en Panamá–, fue pasajero. Harris chocó sistemáticamente con su superior, el embajador en Buenos Aires, Raúl Castro, partidario de apoyar a la facción “moderada” de Videla y Viola. En Washington, en tanto, las críticas de los líderes empresarios, medios conservadores y sus representantes en el Congreso llegaron a su punto máximo, argumentándose que esta política principista enarbolada por Derian y sus acólitos perjudicaba la economía estadounidense: “Exacerbadas [esas críticas] por el creciente déficit en la balanza de pagos y el resurgimiento de la tensión en la *guerra fría*, hacia la segunda mitad de la presidencia de Carter la agenda de los derechos humanos iría debilitándose en el rubro de las prioridades de la política estadounidense” (Schimidli, 2013: 155).

En el sexto capítulo de su libro, Schmidli se ocupa de las relaciones bilaterales en los dos últimos años del gobierno de Carter, cuando la frustración de Derian se hizo palpable: la Casa Blanca inició un giro en su política hacia la Argentina, tendiente a normalizar el vínculo bilateral y a poner fin a las críticas oficiales al régimen. Esto respondió a los crecientes cuestionamientos de los empresarios y medios conservadores estadounidenses, que acusaban a la Administración Carter de obstruir las potencialmente provechosas relaciones comerciales con la Argentina, negándole créditos. Este cambio coincidió con la nueva etapa de la *guerra fría* que se inició en 1979, cuando se produjo la caída del régimen del Shá en Irán, la invasión soviética a Afganistán y el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Uno de los principales impugnadores del giro que se había producido en 1977 fue Zbigniew Brzezinski, asesor del *National Security Council*, quien señaló que las críticas a la Junta Militar Argentina por la violación de derechos humanos eran contraproducentes para los intereses estadounidenses. En los meses subsiguientes, Carter cedió ante la presión de la comunidad de negocios, en función de recomponer el vínculo con el *lobby* empresario, tras lo cual fluyeron nuevamente las transferencias de fondos hacia Argentina (en 1979, las exportaciones estadounidenses hacia el país del sur se incrementaron un 140% respecto al año anterior). En un porcentaje similar se elevó la deuda argentina con bancos internacionales privados, liderados por los estadounidenses. Ese mismo año, se inició la colaboración de las fuerzas armadas argentinas en la lucha contrainsurgente en Centro América: se enviaron asesores a Honduras, El Salvador y Guatemala para contener la influencia sandinista. En síntesis, señala el autor, “En vista de las agresivas iniciativas soviéticas en África y las crisis en Irán y Nicaragua, Carter crecientemente se movió hacia las más tradicionales políticas de la guerra fría, postuladas por Brzezinski” (Schimidli, 2013: 174). La contracara de la creciente influencia de este asesor fue el ocaso de la política de derechos humanos impulsada por Derian, cuyo poder fue limado, hasta que renunció. El nuevo *giro* neoconservador, muestra el autor, antecedió al triunfo de Reagan en las elecciones de noviembre de 1980.

Reagan, Galtieri y el ocaso de la dictadura

Desde 1980, la Argentina se involucró más en los conflictos del continente. Colaboró con el golpe de Estado de Luis García Meza en Bolivia, participó en la lucha anti-sandinista en Nicaragua y profundizó los operativos en el marco del Plan Cóndor (coordinación entre las dictaduras latinoamericanas y la CIA para la persecución y el exterminio de miles de dirigentes políticos y sociales). En los seis meses que Galtieri ocupó la Casa Rosada, la relación con Washington atravesó dos etapas. La primera, desde diciembre de 1981 hasta el 2 de abril de 1982, se caracterizó por una fuerte cooperación bilateral y una acción conjunta en la lucha contra las fuerzas revolucionarias en América Central. La estrategia del canciller Nicanor Costa Méndez fue

mostrar la sintonía entre la adscripción occidental y anticomunista de su jefe y la orientación conservadora de Reagan.

La mejora en las relaciones con la Casa Blanca, en función de las necesidades estratégicas del Departamento de Estado, llevó erróneamente a creer que estas afinidades podrían ayudar al gobierno militar para buscar una solución diplomática una vez que se recuperaron por la fuerza las Islas Malvinas.

Las pretensiones de Galtieri chocaron contra la histórica alianza Washington-Londres. La OTAN, y no el TIAR, fue la esperable elección de Estados Unidos. Galtieri no pudo contar con el apoyo de Reagan, quien intentó disuadirlo el 1 de abril para que no ocupara las Malvinas, y debió sobreactuar una política tercermundista, que no hizo sino profundizar las tensiones con Washington, hasta el final de la guerra y su renuncia, en junio de 1982. El estallido del conflicto bélico con Gran Bretaña cerró la etapa de acercamiento bilateral iniciada a principios de los años ochenta.

El período de Reynaldo Bignone y la transición hasta el final de la dictadura dieron lugar a una distensión en el vínculo bilateral. La Junta, debilitada militar, económica y políticamente, debió bajar el perfil de su política exterior. Reagan, por su parte, adoptó una actitud de cautela ya que intentaba mejorar la relación con América Latina, deteriorada luego de la posición abiertamente pro-inglesa desplegada por la Casa Blanca durante la Guerra de Malvinas, y por el estallido de la crisis de la deuda externa en México.

Hasta el final de la dictadura, no hubo mayores sobresaltos en la relación bilateral. El flamante embajador en Estados Unidos Lucio García del Solar, señala en una entrevista recientemente publicada que no hubo reclamos por parte de Estados Unidos para forzar la convocatoria a elecciones y el final de la dictadura militar: “No, no había presión; yo creo que estábamos todavía en el período donde la influencia de la tesis de Kirkpatrick era vigente; el cambio de orientación en ese sentido vino con la segunda presidencia de Reagan; durante la primera presidencia se mantuvo vigente ese principio de que los gobiernos autocráticos eran tolerables y hasta podían ser aliados, y los gobiernos totalitarios, no”⁹. Recién con la vuelta de la democracia y la asunción de Raúl Alfonsín, el vínculo con Estados Unidos adquiriría una nueva dimensión, respondiendo a contextos y agendas en parte diferentes.

Conclusiones

A principios de los años setenta, Estados Unidos recrudeció su cruzada anticomunista y contraria también a los nacionalismos en la región. La Casa Blanca, tras haber apoyado el golpe de Pinochet contra Allende, generó rechazo en muchos países del continente. Luego de esta acción, Nixon intentó recomponer las relaciones con América Latina. Kissinger prometió un *Nuevo Diálogo* con América Latina, que entusiasmó al canciller argentino Alberto Juan Vignes, quien se (auto) vislumbraba como un posible mediador entre sus pares de la región y la Casa Blanca (Vignes, 1982)¹⁰. Tras la asunción de Cámpora, se prefiguraba una profundización de la política exterior con tendencia autónoma vinculada a la Tercera Posición. Hubo críticas a la OEA, intentos de romper el bloqueo económico a Cuba, revisar el TIAR y plantear un vínculo más intenso con los países latinoamericanos. Tras la rápida salida de Cámpora y su canciller, Juan

⁹ Véase la entrevista al nuevo embajador argentino en Washington, Lucio García del Solar en Rapoport (2016).

¹⁰ Una posición similar de *mediador* entre Washington y sus vecinos del sur había ensayado Frondizi en 1961, tras en torno a la revolución cubana. Analizamos esta fallida iniciativa en Míguez y Morgenfeld (2015).

Carlos Puig, durante la gestión de Vignes al frente del Palacio San Martín hubo elementos contradictorios en la relación con Washington y tensiones con otros funcionarios influyentes del gobierno, como el ministro de Economía Gelbard. Ya durante el mandato interino de Lastiri, se morigeraron los choques con la Casa Blanca. Cuando asumió Perón, si bien se mantuvieron los principios de la Tercera Posición, se moderó el enfrentamiento con Estados Unidos, en función del objetivo de atraer al país capitales de ese origen y conseguir mejor acceso al mercado estadounidense para las exportaciones argentinas (tal fue el planteo en el encuentro continental de Tlatelolco, México, en febrero de 1974).

Durante el gobierno de Isabel Perón, y en medio de una profunda crisis económica, la relación bilateral fue contradictoria. Se enviaron señales a la Casa Blanca para mejorar el vínculo -así puede leerse la elección del argentino Orfila al frente de la OEA, luego de que el gobierno argentino hubiera repudiado ese organismo y amenazado con abandonarlo-, a la vez que se anunciaron ciertas políticas nacionalistas que irritaron a Washington.

El vínculo bilateral dio un giro radical desde marzo de 1976, cuando se conoció el nombramiento del ministro de economía Martínez de Hoz, con fluidas relaciones con David Rockefeller y la gran banca estadounidense. Videla proclamó rápidamente su alineamiento con Occidente y la lucha contra el comunismo como eje de su gobierno, siguiendo los mandatos de la *Doctrina de Seguridad Nacional*. Más allá de esta coincidencia ideológica con la Administración Ford, los choques con Washington no desaparecerían en los años siguientes. Desde la asunción de James Carter, el tema de la violación a los derechos humanos fue un eje recurrente de conflicto. En esos años, se estableció un triángulo económico con Estados Unidos y la Unión Soviética, destino principal de las exportaciones argentinas. La llegada al poder de Reagan y Galtieri, y el creciente involucramiento argentino en la lucha contrainsurgente en Centroamérica propiciaron un acercamiento bilateral, que se interrumpió tras el estallido del conflicto por Malvinas. De todas formas, la Casa Blanca no ejerció presiones para impulsar el fin de la dictadura y la convocatoria a elecciones, cuestión que fue valorada positivamente por el gobierno encabezado por el general Bignone.

El golpe de 1976 fue bien recibido en Washington, desde donde fluyó no sólo el rápido reconocimiento diplomático sino la ayuda financiera y militar, negada al gobierno constitucional depuesto. Sin embargo, ese acercamiento bilateral fue fugaz, debido a la elección de Carter en noviembre de 1976 y a la profundización de la *apertura hacia el Este* por parte del gobierno argentino. Cuando los halcones del Pentágono y sus aliados en la Secretaría del Tesoro limitaron la influencia en el Departamento de Estado de Patricia Derian y quienes impulsaban sanciones contra la dictadura argentina por la sistemática violación de los derechos humanos, hubo un nuevo acercamiento, que se afianzó con la colaboración argentina en la guerra sucia en Centroamérica, y todavía más con la llegada al poder de Reagan y Galtieri.

El Pentágono, que desde la posguerra pugnó por reemplazar a Europa como principal abastecedor de las fuerzas armadas latinoamericanas, logró que a partir de los años sesenta éstas se comprometieran en la aplicación de la *Doctrina de Seguridad Nacional* y la lucha contra la *subversión*. En esos años, muchos militares argentinos se formaron en la Escuela de las Américas y tejieron vínculos con sus pares estadounidenses, que permitieron incluso coordinar operativos internacionales de represión social y participar en la lucha contrainsurgente en América Central. En 1983, cuando se inició la transición post dictatorial con Raúl Alfonsín, el vínculo bilateral enfrentaría nuevos desafíos y agendas.

En Estados Unidos también hubo un cambio en la política exterior, a partir de la asunción de Ronald Reagan en 1981. Incluso en la campaña, el candidato republicano se ocupó de criticar el oprobio al que Carter había sometido a la Junta Militar Argentina. En su gobierno, planteó, el tema de los derechos humanos volvería al terreno de la *quiet diplomacy* que había cultivado

Kissinger –las “observaciones” sobre esta temática sensible debían plantearse a través de canales reservados, no públicos-. Dos meses después de llegar a la Casa Blanca, Reagan anunció planes para convencer a los legisladores de derogar la prohibición de vender armamentos y suplementos militares a la Argentina, y en julio se terminó con la política de votar en contra de los créditos para la Argentina en las instituciones financieras internacionales, basada en el tema de los derechos humanos. Para reforzar este acercamiento, a mediados de mayo Viola fue invitado a una visita oficial a Washington.

En su análisis de la influencia de los derechos humanos en la política exterior estadounidense, el citado libro de Schimidli se centra en algunas figuras emblemáticas que lograron introducir en las distintas esferas de gobierno en Washington las demandas de un movimiento de base bastante extendido desde los sesenta, focalizándose en la gran heroína de su relato: Patricia Derian. En el ascenso, auge y posterior declinación de esta funcionaria parece graficarse la fugacidad del lugar destacado que supieron ganar las consideraciones de los derechos humanos en la política trazada por el Departamento de Estado. Como en muchos otros análisis anglosajones sobre esta dimensión de la política estadounidense, el texto despliega toda su riqueza en el seguimiento pormenorizado de las trayectorias y acciones de determinados funcionarios, ocupando un lugar destacado del análisis las disputas intra burocráticas, muchas de las cuales se conocen más profundamente gracias a las entrevistas realizadas por el autor –entre las que se destacan, entre otras, las de Patricia Derian, “Tex” Harris, Robert Cox y Olga Talamante-.

Sin embargo, está pendiente una explicación más compleja y general de por qué el tema de los derechos humanos no logró transformarse en una variable explicativa relevante en la política exterior estadounidense, ni siquiera durante la presidencia de Carter (ni hablar de su antecesor Ford o su sucesor Reagan). Schmidli plantea que el tema de los derechos humanos podía ser una buena propaganda contra el comunismo –por eso esa apelación no sólo fue apoyada por sectores de izquierda y progresistas en Estados Unidos, sino también por sectores conservadores que juzgaron que podía convertirse en una eficaz arma ideológica para atacar a los países socialistas-, pero no se explica adecuadamente qué implicancias tiene que el gobierno de “un” país se atribuya el derecho de juzgar el respeto o violación de los derechos humanos (o la democracia, podríamos agregar) en los demás países, por encima de las soberanías nacionales. Este debate no sólo es importante desde el punto de vista histórico, sino también en la actualidad. El enfoque de Schmidli, aunque bien intencionado, adolece de cierta ingenuidad en tanto supone que las ONGs y movimientos sociales progresistas podrían potencialmente presionar a la Casa Blanca para contrarrestar la presión del *lobby* empresarial y así hacer de la política exterior estadounidense un arma contra las tiranías en otros países no centrales. Su investigación, de todas formas, muestra los límites casi infranqueables que debieron enfrentar quienes pretendieron imbuir de cierto idealismo o principismo la política exterior estadounidense en los años setenta.

La reciente visita de Obama en coincidencia con el 40 aniversario del golpe, hecho que suscitó numerosos debates y críticas, logró lo más positivo: el anuncio de la desclasificación de archivos militares y de inteligencia de Estados Unidos sobre la dictadura (Ludueña y Bertoia, 2016). Este anuncio de Obama pretendió morigerar las críticas de los organismos de derechos humanos, quienes hace más de 15 años trabajan para que Estados Unidos aporte esa información (Nahón, 2016). Quienes trabajamos con este tipo de documentos, si efectivamente se concreta su desclasificación, podremos conocer más exactamente los alcances del Plan Cóndor, el rol de la Escuela de las Américas, la cobertura diplomática de los dictadores y los vínculos con civiles y militares locales. También, quizás, se aporte información para avanzar en los juicios a los represores. La esperada autocritica de Obama, que no fue tal, buscó limpiar la imagen de Estados Unidos e impulsarlo como el gran defensor de los derechos humanos en la actualidad (a pesar de los asesinatos selectivos con drones, de la legalización de la tortura, del espionaje masivo contra

ciudadanos y gobiernos a través de la NSA), y erigir a Macri como el baluarte regional del uso instrumental de ese tema tan sensible (pensado para atacar a gobiernos no alineados, como el venezolano o el cubano, pero no al de Honduras, a pesar, por ejemplo del reciente asesinato de la dirigente campesina hondureña Berta Cáceres). Más allá de la ofensiva ideológica y mediática continental, las calles argentinas, en las que se registró la mayor movilización de toda los 24 de marzo de las últimas décadas, mostraron que la utilización de los derechos humanos para reinstalar una agenda conservadora en el continente no calaron en la Argentina (Morgenfeld, 2016b).

Analizar cómo el gobierno de los Estados Unidos abordó históricamente el tema de los derechos humanos –por ejemplo, durante los años setenta, en el vínculo con las dictaduras latinoamericanas- permitirá entender, en el presente, cómo se los utiliza como excusa para intervenir en los asuntos internos de países no alineados –los casos de Cuba y Venezuela, en la actualidad, son los más elocuentes-. En el presente artículo, procuramos avanzar en el debate histórico sobre esa problemática, actualizado tras la visita de Obama y la pretendida autocrítica sobre el vínculo del gobierno estadounidense con la última dictadura militar argentina.

Bibliografía

- Escudé, Carlos y Cisneros, Andrés (2000). *Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
- Ludueña, María Eugenia y Bertoia, Luciana (2016) “Archivos: desclasificar el silencio”, en *Anfibia*, 24 de marzo.
- Mazzei, Daniel (2013) “El águila y el cóndor. La relación entre el Departamento de Estado y la dictadura argentina durante la Administración Ford (1976-77)”, en *Huellas de Estados Unidos*, Número 5, septiembre, pp. 9-25.
- Míguez, María Cecilia y Morgenfeld, Leandro (2015) “Las relaciones entre Argentina y Cuba y su impacto en el sistema interamericano en los años ‘60”, en Rapoport, Mario (director) *Historia oral de la política exterior argentina (1930-1966)*, Buenos Aires, Editorial Octubre, pp. 159-198.
- Morgenfeld, Leandro (2013). “Nelson A. Rockefeller en la Argentina: una visita incómoda tras el Cordobazo”, en *Revista Taller, Segunda Época*, Volumen 2, Número 2, julio 2013, pp. 90-104, Buenos Aires.
- Morgenfeld, Leandro (2014) “Argentina y Estados Unidos, golpe a golpe (1966-1976)” en *SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político*, Vol. 8, N. 2, noviembre, pp. 521-554.
- Morgenfeld, Leandro (2015) Reseña de Schmidli, William Michael: *The Fate of Freedom Elsewhere. Human Rights and U.S. Cold War Policy toward Argentina*, en *Rey Desnudo. Revista de libros*, Año 4, Número 7, primavera 2015, Buenos Aires, Argentina, pp. 99-106.
- Morgengeld, Leandro (2016a) “Obama y el 24 de marzo”, en *Notas. Periodismo Popular*, 3 de marzo.
- Morgenfeld, Leandro (2016b) “El amigo americano. Obamanía en la Argentina”, en *Anfibia*, 25 de marzo.
- Nahón, Cecilia 2016 “Hacia un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia”, en *Página/12*. 18 de marzo.
- Novaro, Marcos (2011). *Cables secretos. Operaciones políticas en la Argentina de los setenta*, Buenos Aires, Edhasa.
- Rabe, Stephen (2012). *The Killing Zone. The United States Wages Cold War in Latin America*, New York, Oxford University Press.

- Rapoport, Mario (director) (2016) *Historia oral de la política exterior argentina (1966-1983)*, Buenos Aires, Editorial Octubre).
- Rapoport, Mario y Spiguel, Claudio (2005). *Política Exterior Argentina. Poder y conflictos internos (1880-2001)*, Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Schmidli, William Michael 2013 *The Fate of Freedom Elsewhere. Human Rights and U.S. Cold War Policy toward Argentina* (Ithaca, New York: Cornell University Press).
- Sheinin, David (2006). *Argentina and the United States. An alliance contained*, Athens, University of Georgia.
- Vignes, Alberto Juan (1982). *Dos años de política internacional argentina, 1973-75*, Buenos Aires, Pleamar.

